

Construyendo una nueva ciudadanía: luchas sociales y Trabajo Social

Luisa Benito Sánchez¹
Marcos Chinchilla Montes²

Durante los meses de marzo y abril del año 2000 Costa Rica experimentó una revuelta social que paralizó buena parte del país durante más de 3 semanas, y que a la postre, marco un nuevo derrotero en los espacios de participación social.

La revuelta, también logró poner un freno -o al menos, otra ritmo- a los intentos de privatización de instituciones públicas y a la mal llamada "modernización" del Estado Costarricense.

La participación social fue decisiva para lograr dar marcha atrás con los intentos de privatización de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, y dentro de está, se dieron numerosas expresiones de participación de estudiantes, docentes y profesionales en Trabajo Social.

El presente documento explora esas instancias de participación e inicialmente fue utilizado como insumo de análisis en el taller "La movilización de los Asistentes Sociales en América Latina: ética y ciudadanía", organizado por el Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social, y se presentó en el marco del segundo Forum Social Mundial realizado en el año 2002 en Porto Alegre, Brasil.

1. CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOCIAL

El desarrollo social y económico costarricense era incipiente a finales del siglo XIX; similar a muchos de los países latinoamericanos, el liberalismo económico enmarcaba las prácticas políticas, económicas y sociales de la sociedad costarricense de aquella época (Fallas, 1986). La pobreza era una de las situaciones mayormente generalizadas, tanto por la concentración de riqueza de la elite oligárquica como por la enorme carencia en la atención eclesial y gubernamental hacia los pobres.

Luego de la crisis mundial capitalista del año 1929, se presentaron una amalgama de movimientos obreros, sociales y políticos que condujeron a la creación del partido comunista y a la "sensibilización"³ social de algunos de los partidos políticos de la época. Para la década de 1930 se comienzan a aprobar un

¹ Bachiller en Trabajo Social, egresada de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Ex presidenta de la Asociación de Estudiantes 1999-2001.

² Licenciado en Trabajo Social, profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Maestrando en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.

³ Con el término sensibilización nos referimos a la inclusión de planteamientos humanistas y socialistas en el discurso de los partidos y del gobierno. Así, puede destacarse que partidos como el Republicano incluyeran en su ideario político un conjunto de planteamientos cristianos y socialistas que no siempre estaban en concordancia con su basamento conservador y liberal.

conjunto de leyes que tutelan los derechos de los trabajadores o que le daban mayor nivel de intervención al Estado en la cuestión económica.

Durante los años 40 se producen reformas sociales de gran significado para la sociedad de aquel momento y con enormes implicaciones para la actual, nos referimos a la creación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, las Garantías Sociales y el Código de Trabajo (Molina y Palmer, 1997).

En década de los 40 era inminente que se fraguaba una lucha social orientada a desplazar al sector oligárquico y facilitar el ascenso de una burguesía industrial. La misma se gestó en el año 48 por medio de un enfrentamiento militar que se extendió por 5 semanas.

Concluida esta breve guerra, se establece una Junta Política con la que el bando vencedor inicia una serie de reformas políticas y sociales orientadas a sustituir el modelo de importaciones por uno de exportaciones, se respetan y consolidan los logros sociales que se habían alcanzado en los años anteriores y, se elimina el ejército, situación esta última que permite canalizar una cantidad importante de fondos económicos al desarrollo industrial y social que se daría en los siguientes años. Se abre paso así al Estado interventor, social, empresario, protector.

De 1950 a finales de la década de los 70 se dio un vigoroso desarrollo institucional que debe ser enmarcado en el Estado de Bienestar, los indicadores sociales y económicos muestran un comportamiento favorable y creciente en la mayor parte de los ámbitos sociales y económicos. Estas condiciones se hacían acompañar de indicadores de éxito y eficiencia institucional, además de un bajo nivel de corrupción en la administración de lo público.

Si bien no se daba una distribución social de la riqueza de manera directa, las políticas sociales permitían hacerlo de manera indirecta a través del salario social⁴ y la vasta red de instituciones públicas creadas para tal efecto (Calvo, 1993): acceso a la salud (prácticamente con cobertura universal), educación en primaria y secundaria gratuita, subsidios para vivienda, sistemas de pensiones, posibilidades de acceso a la educación universitaria costeadas por el Estado, servicios públicos como el transporte, la electricidad, las telecomunicaciones y el agua subsidiadas por el Estado.

Durante todo este periodo, las posibilidades de ascenso social permitidas por el modelo productivo fueron creando una vigorosa clase media que identificaba en el Estado y en los partidos políticos, un medio para mantener y profundizar sus conquistas económicas, sociales y hasta políticas.

⁴ Estamos plenamente claros que el salario social debe ser entendido en el contexto del Estado de Bienestar, y este último, como una herramienta capitalista para garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas y transferir a su vez, insumos de producción del sector público al privado, abaratando así los costos de producción para el dueño de los medios de producción.

2. LAS LEALTADES, UN FANTASMA CONTRA NEOLIBERAL

La década de los 80 enfrenta el paulatino agotamiento del Estado de Bienestar, la crisis capitalista de los años 70, el arribo del ala neoliberal en la administración de lo público y la profundización de la guerra en varios países de la región centroamericana.

El barco hace aguas y se hace notoria la influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la conducción de las políticas económicas: políticas de estabilización monetaria, reducción del tamaño del Estado, programas de ajuste estructural, promoción de la iniciativa privada, apertura comercial, reconversión productiva, etc. (Solís, 1992).

A esta altura es posible identificar algunas situaciones notorias que servirán para identificar la posición de los actores sociales y los trabajadores sociales en la defensa de las conquistas⁵ económicas, sociales y políticas alcanzadas desde los años 20:

2.1 *Diferenciación con Centroamérica*

En el plano social y económico Costa Rica se había distanciando de manera sustancial de sus otros vecinos centroamericanos. La pobreza era mucho menor y se contaba con una amplia red de servicios de seguridad social, que si bien eran insuficientes para atender las necesidades de la población, al menos garantizaban niveles de seguridad social aceptables⁶. Esa distancia -y lo es aun hoy en día- llegó a convertirse en una condición de identidad nacional con la cual muchos costarricenses se han llegado a sentir superiores, privilegiados y diferentes a los centroamericanos. Revertir la distancia es hacerse centroamericano para muchos⁷.

2.2 *Instrumentalidad de la seguridad social*

El modelo de sustitución de importaciones y de industrialización si bien se encontraba en franco deterioro, había sido beneficioso para las élites económicas, especialmente para los industriales. Desestructurar la seguridad social en un corto plazo, implicaba reducir los márgenes de ganancia que garantizaba una mano de obra sana y capacitada. Además, no había mucha claridad sobre la conveniencia de concentrarse en el campo financiero y de los servicios en detrimento de la actividad industrial. Serían otros grupos económicos los que darían el salto al campo financiero y de los servicios, y ahí si, el nivel de presión por dismantelar la seguridad social sería más evidente y sostenido, especialmente en la década de los 90.

⁵ Recordemos que en el término conquista está implícito un esfuerzo social por alcanzar el reconocimiento de derechos. Muchos de estos esfuerzos se alcanzaron después de sendas manifestaciones y movilizaciones sociales que presionaban al gobierno por ellos.

⁶ Uno de los distanciamientos de mayor relevancia pero con poco peso en las representaciones sociales es la ausencia de ejército en Costa Rica. Sin embargo, ello repercute en un sentimiento falso de absoluta paz que no se le atribuye al resto de Centroamérica.

⁷ El sentirse no centroamericano no solo obedece a una construcción cultural popular, en el fondo subyacen condiciones políticas impulsadas en el plano ideológico por los diferentes estamentos políticos dominantes. Una muestra fehaciente de ello ha sido el rechazo pleno de diferentes gobiernos para integrar a Costa Rica en el Parlamento Centroamericano.

2.3 Consenso y negociación

Después de la guerra del año 48 en Costa Rica se ha presentado una actitud política orientada hacia los consensos y la negociación. En tal sentido, en los primeros años de las reformas económicas neoliberales no existió el suficiente consenso como para avanzar en reformas vertiginosas. Más aún, uno de los partidos mayoritarios (heredero de los avances sociales y económicos del periodo 50-80) mostró inicialmente mucho recelo para avanzar en las mismas, aunque finalmente las abrazó como de su propia causa aunque riñera abiertamente contra su ideario social demócrata. Las reformas neoliberales podían considerarse como tímidas, graduales pero innegablemente, avanzaban de forma paulatina.

2.4 Velocidad de las reformas

Las reformas económicas han pasado de la estabilización económica, al ajuste estructural y más recientemente, a la apertura de mercados y a la supuesta "integración" a la globalización. Pueden identificarse dos tipos de medidas, las graduales y las de choque.

Las primeras han sido implementadas por gobiernos socialdemócratas y el ritmo de la reforma no ha sido acelerado, en tal sentido, el costo social ha sido menor y se ha presentado una tendencia a negociar las reformas. La reacción social ha sido de menor intensidad y por lo general sin llegar a crear un amplio nivel de convulsión social.

Las medidas de choque han sido características de los gobiernos socialcristianos, evidenciando una preocupación por acelerar las reformas y por apropiarse a la brevedad de las ganancias que se asocian con estos servicios. Por lo general el costo social de estas medidas es mucho más marcado, generando más pobreza, desempleo y exclusión social. La respuesta social es más contundente y por lo tanto, se da una reactivación de los movimientos sociales y del tejido social.

2.5 Las lealtades

La basta red de instituciones y servicios públicos creados en el plazo de treinta años, creo además de un sector público de gran tamaño y con miles de empleados públicos, un sentimiento de lealtad entre los cientos de beneficiarios de estas instituciones gubernamentales.

De aquí podemos derivar dos lecciones valiosas que han permitido detener el avance de las reformas neoliberales desde el espacio ciudadano. En primera instancia, que al convertirse el sector público en una nutrida fuente de empleo, este ha reaccionado en diversos momentos para evitar las reformas que amenazaban el empleo y otras garantías laborales conquistadas por est@s. La participación de sindicatos y otra clase de asociaciones gremiales -no siempre con una misma agenda o con acuerdos comunes- ha sido un factor que ha impedido que los intentos de reforma y "modernización" del Estado⁸ se lleven a la práctica tal y como fueron propuestos.

⁸ Resultan innegables los intentos orientados a reducir la afiliación a los sindicatos, a limitar sus espacios de participación o a procurar desacreditarlos y desestructurarlos. En más de 20 años de neoliberalismo en Costa Rica, los sindicatos no han ganado todas sus batallas y en muchos

Por otro lado, vale la pena destacar el valor representativo e instrumental que la seguridad social tiene para la sociedad costarricense. Si bien los diversos servicios públicos muestran carencias en su calidad, eficiencia y cobertura, estos siempre han sido valorizados de forma positiva por la sociedad costarricense, generando así una suerte de lealtad⁹ que ha sido un factor determinante para que la sociedad se oponga a la venta, privatización, o traspaso de estos servicios y activos públicos al sector privado. La lealtad social a los servicios públicos se ha expresado a lo largo de estos últimos 20 años en huelgas, paros, marchas, toma de edificios, cierres de carreteras, discusiones académicas, y otra diversidad de movilizaciones sociales que han limitado el alcance de los intentos de privatización de la seguridad social.

3. EL COMBO ICE, CRISOL DE UNA NUEVA CIUDADANÍA

No podemos concebir la participación y movilización de trabajadores sociales sin antes reconocer la participación de la sociedad en la defensa de sus derechos y conquistas sociales. Verse como actores, pero aislados de un todo humano que empuja, lucha y defiende su ciudadanía no tiene sentido. Entendemos la participación del Trabajo Social enmarcada en las luchas sociales que llevan a cabo grandes colectivos sociales.

La movilización de los trabajadores sociales costarricense responde a un compromiso político, a una posición ética que concibe y defiende una sociedad inclusiva y justa.

Partimos de reconocer que desconocemos en buena medida la vinculación de los cientos de trabajadores costarricenses en las movilizaciones sociales de nuestro pueblo¹⁰; sin embargo, nos atenemos a nuestra experiencia estudiantil y profesional que abarca los últimos 13 años.

El caso que retomamos en este documento data del año 2000 y fue conocido como la movilización social contra el Combo del ICE, por sus características en cuanto a movilización popular, violencia, duración y efectos políticos y de participación en el corto, mediano y largo plazo creemos que es el más significativo de retomar¹¹.

casos, se desgastan en batallas internas, intra sindicatos o mostrando preocupantes expresiones de deslealtad de sus líderes para con sus afiliados y a las luchas que deben de dar. La tendencia es común en toda la región, y debe ser entendida en los esfuerzos que hace el neoliberalismo por desgastar o eliminar cualquier oposición contraria a sus intereses capitalistas.

⁹ El tema de las lealtades sociales al Estado de Bienestar fue retomado por Mann cuando analizó las contradicciones que experimentó la privatización del bienestar social en la Inglaterra de Thatcher. Ante una basta red de servicios sociales que llenaban las expectativas de sus usuarios, se dio una oposición creciente por parte de bastos sectores sociales a privatizar estos servicios por los sucesivos gobiernos conservadores de ese país.

¹⁰ La primera Escuela de Trabajo Social fue abierta en el año 1942 en Costa Rica, pretender conocer su participación y trayectoria en movilizaciones sociales requeriría de un esfuerzo investigativo que supera nuestras pretensiones para con este documento.

¹¹ Conocemos de la movilización de trabajadores sociales desde los años 70, particularmente con la movilización nacional que se dio para evitar la firma de una ley que le brindaba concesiones leoninas a la Aluminun Company American (ALCOA), y que desató una revuelta social que para su tiempo no tuvo comparación. Durante los 80 y 90 múltiples manifestaciones, paros y huelgas

Desde mediados de los años 80 era evidente el interés de los sucesivos gobiernos por privatizar o transferir algunas actividades vinculadas con la producción de energía y telecomunicaciones al sector privado. La magnitud del negocio ronda hoy en día cerca de los 117 mil millones de dólares anuales.

El negocio era más que tentador, pero la institución detrás de esos márgenes de ganancia era una insignia nacional en cuanto a cobertura, eficiencia y calidad de los servicios. Así, el único consenso para privatizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) venía de una mayoría parlamentaria, del poder ejecutivo y de sectores comerciales interesados en el negocio de las telecomunicaciones.

El paso, muy mal calculado por cierto, fue iniciar las privatizaciones con la institución insignia. Así, durante la administración Rodríguez (1998-2002) se introdujo en la corriente legislativa el proyecto de ley # 13873 "Ley para el mejoramiento de los servicios de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado", popularmente conocido como Combo ICE.

3.1 *Primer momento. La inercia*

Mucho antes de enero del 2000 ya los sindicatos del ICE y otros grupos políticos habían advertido del riesgo del proyecto de ley que se tramitaba en la Asamblea Legislativa. Diferentes organizaciones sociales se movilizaban para protestar ante la Asamblea Legislativa por la tramitación del proyecto de ley puesto que contaba con el visto bueno de la mayoría de los congresistas.

La participación de trabajadores sociales y en general de la ciudadanía, era exigua. Por las tardes y noches de febrero se concentraba ante la Asamblea Legislativa grupos de ciudadanos con pancartas, coreando consignas o rodeando con antorchas la Asamblea Legislativa. En las diferentes concentraciones habremos identificado lo más a 5 o 6 trabajador@s sociales entre docentes, estudiantes y profesionales. La capacidad de articulación era mínima, por no decir inexistente. Una especie de confianza ingenua impregnaba a muchas de las personas participantes, quizás esas esporádicas concentraciones serían capaz de cambiar la voluntad de los legisladores y del capital transnacional.

La organización profesional de Trabajadores Sociales -docentes y profesionales- de hecho era inexistente, así que mientras la tramitación del proyecto avanzaba no había ninguna manifestación profesional ni para enfrentar el proyecto o para articularse con otros sectores sociales dispuestos a dar la lucha.

3.2 *Segundo momento. Movilización, propuesta y violencia*

Para el mes de marzo se había avanzado en buena medida en la discusión del proyecto de ley, todo indicaba una aprobación por mayoría. En el otro lado de

que apoyaban a campesinos, a instituciones públicas o que velaban por el presupuesto para la educación universitaria contó con la participación de trabajadores sociales (especialmente estudiantes). En 1998 estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, encabezaron un movimiento social orientado a que los diputados no se auto recetaran un aumento de salarios a todas luces ilegal. Las estudiantes montaron una tienda de campaña frente a la entrada de la Asamblea Legislativa y desde allí organizaron la protesta, la cual tuvo eco y apoyo nacional, logrando así evitar el escandaloso aumento que pretendían los diputados y el presidente de la república.

la acera seguían las concentraciones y manifestaciones pero sin mayor impacto; no obstante, se comenzaban a articular esfuerzos entre sindicatos y diversos sectores sociales para enfrentar el proyecto de ley.

Precisamente una semana antes de que se aprobara el proyecto de ley, en la Universidad de Costa Rica se realizó una reunión con la participación de estudiantes universitarios, sindicalistas de varias instituciones y profesores (de este estamento participaron docentes de las escuelas de Estudios Generales, Ciencias Políticas y Trabajo Social).

El acuerdo final fue llamar a una marcha nacional para mediados de esa semana e insistir ante los diputados en no aprobar la ley. Una pregunta sin respuesta quedó en el aire: ¿en el caso de aprobarse la ley cual sería el paso siguiente? Ninguno de los asistentes tenía un panorama muy claro.

Al día siguiente se inició una campaña de sensibilización entre las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social advirtiendo sobre las consecuencias nefastas del proyecto de ley, e invitando a sumarse a la marcha nacional.

El día de la marcha destacaron tres elementos que no habían sido previstos: por un lado más de 6 mil universitarios participaron en la marcha, la misma contó con cerca de 10 mil participantes y decenas de organizaciones, superando las expectativas de participación de los organizadores; finalmente, en la Escuela de Trabajo Social se había creado la "Comisión de defensa de la Institucionalidad Costarricense de la Escuela de Trabajo Social"¹² (CDICETS) por iniciativa de estudiantes, docentes y administrativos de la unidad académica.

Una evaluación posterior realizada por los primeros organizadores llegó a la conclusión que la marcha se les había escapado de su control, y que en lo sucesivo sería imposible marcar líneas de acción integradas, máxime que había una amplia diversidad de organizaciones participando en todo el país.

A lo largo del país se hizo la misma lectura de lo que había ocurrido ese día: la ciudadanía estaba participando de forma activa sin necesariamente estar representada por organizaciones que la mediatizaran. En las siguientes semanas la participación se profundizaría hasta generar una revuelta social prácticamente incontrolable para el gobierno. Los años de cansancio, decepción y frustración ante una clase política que solo pensaba en su bienestar tenían como colorario a una sociedad que se lanzaba a las calles para defender sus derechos.

El lunes 20 de marzo se aprobó en primer debate el Combo ICE, las medidas de seguridad y contención utilizadas por parte del Poder Ejecutivo fueron tomar la Asamblea Legislativa con la policía para evitar cualquier toma violenta del recinto legislativo -como había ocurrido en el año 70 cuando se aprobó el proyecto de ALCOA y se dio una revuelta social más violenta pero menos intensiva.

La aprobación no fue tomada con sorpresa, durante semanas la población se había preparado para la misma; sin embargo, un nuevo ingrediente se sumaba: la desobediencia civil¹³ se instalaría a lo largo de país así como la violencia

¹² Destaca el hecho que en muchas unidades académicas y organizaciones comunales y laborales se crearon organizaciones con una naturaleza similar, creadas precisamente para enfrentar la aprobación del proyecto de ley.

¹³ Los medios de comunicación nacionales e internacionales minimizaron los alcances de esta confrontación social, era claro que el ejemplo anti privatizador y contra neoliberal no era propicio para la región. Y como la memoria es corta, para muchos analistas el reciente cacerolazo

institucional instaurada por el gobierno. En este nuevo contexto, el Trabajo Social reforzaría su presencia.

A esta altura, quisiéramos destacar varios frentes de participación profesional en este conflicto:

El gremial

No se tiene conocimiento de que el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (CTSCR) asumiera una posición pública ante la situación derivada del Combo ICE, mucho menos de que pudiera nuclear al colectivo profesional para hacer sentir su presencia en las diferentes actividades de análisis y oposición al proyecto de ley.

Si bien el CTSCR mantiene diferentes comisiones permanentes, ninguna se dedica al análisis de la realidad nacional. Así que durante los días del Combo ICE fue uno de los grandes ausentes en la movilización social¹⁴.

En las marchas, bloqueos y otras actividades de desobediencia civil se logró identificar a colegas que participaban a título personal; sin embargo, la principal carencia de este tipo de participación es que no genera ni identidad profesional ni mucho menos capacidad de articulación social. La desarticulación y desmovilización es el primer paso luego de la victoria.

Estudiantil y docente

La presencia de estos estamentos se caracterizó por su reducida participación si se la compara con la cantidad de miembr@s que los conforman. La creatividad, lucha y compromiso fue el contrapeso a la exigua participación. Cabe destacar que las diferentes actividades de movilización se realizaron en conjunto, integrando incluso personal administrativo de la unidad académica que se había sumado a la protesta social.

Los mecanismos que se utilizaron para orientar la lucha desde el espacio estudiantil y docente fueron variadas y desde distintos frentes, los mismos pusieron su énfasis en: a) sensibilización y producción de información orientada a estudiantes y ciudadanos, b) participación en manifestaciones de fuerza y poder popular y, c) coordinación y negociación.

En el primer frente tanto estudiantes como docentes realizaron una intensa actividad orientada a informarse a profundidad sobre el texto de la ley aprobada, sus consecuencias y su contextualización en el marco de la apertura de mercados y el proceso de globalización. Del mismo se derivan las siguientes acciones:

- Monitoreo de la prensa, radio y televisión para identificar el discurso hegemónico dominante y crear un discurso alternativo que generará unidad entre l@s participantes.

argentino resulta toda una novedad, relegando las luchas sociales anti neoliberales desarrolladas en Costa Rica, Ecuador y Bolivia recientemente.

¹⁴ Cabe destacar que al menos los siguientes dos números de la revista editada por el CTSCR dedicaron artículos para reflexionar sobre el tema. Pero lo cierto es que la ciudadanía no se puede construir solo con reflexiones teóricas, se requiere de un amplio proceso de participación social que asegure el respeto de la voluntad popular y las diferentes construcciones que se asocian a ella.

- Balances diarios de la realidad nacional y de las posiciones de los actores sociales. Esta tarea además de facilitar medir el avance del proceso, sus contradicciones y las debilidades del movimiento popular, permitió ir configurando un panorama que indicaba que las posiciones tendían a radicalizarse, y que la situación del gobierno era agobiante al final del proceso.
- Presencia en los medios de comunicación escritos, electrónicos y de radio. Se publicaron volantes que se distribuían en las marchas y bloqueos, se repartían en los autobuses o se colocaban en lugares estratégicos. En Internet se elaboró una página web que daba cuenta de las acciones desarrolladas y se distribuían correos electrónicos con cierta regularidad. Se participó además en diferentes programas radiales advirtiendo sobre los riesgos de la privatización del ICE y otros servicios públicos. La participación radial se realizaba en vivo – previa petición de espacio- o por medio de intervenciones telefónicas.
- Elaboración de mantas, panfletos, rótulos y otros signos externos que además de denunciar los intentos de privatización, generasen identidad y posición profesional.
- Realización de conferencias y debates con expertos, buscando generar espacios para la crítica, el debate, el enfrentamiento de ideas y la sensibilización social. Incluso se tuvo un espacio permanente todas las semanas para llevar invitados y analizar el problema.
- Capacitación a estudiantes de secundaria, informándoles sobre las particularidades del proyecto, los riesgos implícitos; pero especialmente insistiendo en la necesidad de que asumieran una posición personal y se sumaran a las diferentes actividades de desobediencia civil.

Estas iniciativas de trabajo permitieron un trabajo constante entre estudiantes y docentes, permitiendo incluso la transmisión de conocimientos, experiencias y estrategias de lucha que desarrollaron las docentes en los momentos de mayor efervescencia social en los años 70 y 80. El empoderamiento ciudadano era una de las enormes ganancias que adquiriría la sociedad en todos los niveles sociales, el mismo se revertía en la comprensión de que era necesario defender los derechos sociales y económicos que se vinculaban con el ICE como institución pública. Para las estudiantes y docentes participantes, empoderarse significó tener conciencia de la necesidad de defender sus derechos, de pronunciarse, manifestarse y oponerse al discurso que pretendía insistentemente convencer sobre la conveniencia de privatizar las instituciones públicas.

El segundo frente -participación en manifestaciones de fuerza y poder popular- mostró un mayor nivel de participación de las estudiantes, no siempre enmarcado dentro de la estructura del CDICETS, ni con la misma persistencia que se buscaba desde esta estructura, pero al menos estableciendo un compromiso de las estudiantes.

Estudiantes y docentes participaron en las siguientes actividades:

- Marchas a la Asamblea Legislativa¹⁵.
- Marchas al Instituto Costarricense de Electricidad para apoyar a los estudiantes en huelga de hambre.
- Bloqueos de carreteras y puntos neurálgicos de ingreso a la capital¹⁶.
- Marchas nacionales.
- Apoyo a huelgas o paros parciales o activos.
- Tomas de la ciudad con miles de manifestantes bloqueando la avenida central, la avenida segunda y el ingreso a la Asamblea Legislativa.

Estas actividades en su conjunto permitían reforzar la confianza en la lucha social que se daba y sentir que la misma superaba fronteras ideológicas, generacionales y objetivos de lucha¹⁷, y que era necesario seguir luchando hasta hacer que el gobierno diera marcha atrás con sus intenciones privatizadoras.

El malestar social crecía a lo largo del país con decenas de bloqueos, huelgas, piquetes, concentraciones, sabotaje a las instalaciones eléctricas y agresiones físicas hacia los diputados que habían aprobado el proyecto de ley. La respuesta del gobierno fue comenzar a movilizar contingentes policiales de choque, encargados de agredir, intimidar por la violencia y desmovilizar los bloqueos.

Una de las muestras más elocuentes de estas expresiones de violencia la vivieron los universitarios -y especialmente las participantes de la Escuela de Trabajo Social- el día 22 de marzo cuando fueron reprimidos por la policía a punta de golpes y gases lacrimógenos. Entre el saldo de detenidos se encontraban dos estudiantes de Trabajo Social y dos administrativos que se encontraban en la primera fila del bloqueo. La intimidación y la violencia solo sirvió para exaltar los ánimos y fortalecer el compromiso por la lucha.

Al día siguiente cerca de 200 mil personas se concentraron en una marcha nacional que colapso la ciudad y se dirigió a Casa Presidencial, en todas las provincias y ciudades de importancia se dieron manifestaciones similares. Una mayor cantidad de docentes y estudiantes de Trabajo Social se integraron en esta manifestación que se ha catalogado como la más numerosa¹⁸ en la historia de las

¹⁵ Por lo general las marchas populares en Costa Rica tienen dos puntos de llegada, la Asamblea Legislativa como forma de influir en la voluntad de los legisladores (no digamos representantes pues el concepto se ha trastocado) y Casa Presidencial para presionar al presidente de la república a que retire un proyecto de ley de la corriente legislativa.

¹⁶ Las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica y la rotonda de la hispanidad se convirtieron en punto obligado de bloqueo puesto que facilitan el tránsito de la capital hacia áreas residenciales, industriales y con el sur del país. La esquina sureste, frente a la rotonda de la hispanidad se convirtió en el sitio donde se ubicaron por varios días y semanas las estudiantes y docentes de Trabajo Social.

¹⁷ Una de las cualidades más sobresalientes de esta revuelta social era la diversidad de intereses presentes en las organizaciones y en las personas. Podían encontrarse campesinos, ambientalistas, grupos feministas, comerciantes, no siempre abanderados en la lucha contra la privatización del ICE pero si reclamando la construcción de una sociedad más justa e inclusiva (Carazo, 2001).

¹⁸ El Ministro de la Presidencia, Danilo Chaverri, insistió que en la marcha solo habían cuatro gatos. La policía debió replegarse ante la cantidad de participantes. El gobierno hizo oídos sordos al clamor popular. Quedaba aun pendiente un pulso de desgaste.

luchas populares costarricenses. Era el principio del fin, el triunfo popular se avecinaba.

Marzo cierra con un gobierno prácticamente desgastado, deslegitimado y a punto de derrumbarse políticamente. Más organizaciones sociales se sumaban a la revuelta social, y los funcionarios de los poderosos sindicatos de los muelles y los hidrocarburos amenazaban con terminar de paralizar el país. El riesgo de un caos social y una ruptura del "orden político constitucional" estaba más que asegurado.

La clase política se enfrentaba a una situación medular: abortar el negocio de los 40 mil millones o arriesgarse a perder el poder político y todas las garantías económicas que le garantizaba su permanencia en el poder. El pulso de desgaste fue perdido por el gobierno.

El 4 de abril, en el marco de un país totalmente paralizado, el gobierno se vio obligado a negociar con los representantes sociales las condiciones de la rendición política neoliberal más vergonzosa de los últimos 20 años. El Combo del ICE había fracasado, tocaba solo enterrarlo. Los "Acuerdos del Tribunal Supremo de Elecciones"¹⁹ plantearon el envío del proyecto de ley a una Comisión Mixta que lo revisaría y propondría un proyecto alternativo.

Durante esa jornada una nutrida representación estudiantil y docente de la Escuela de Trabajo Social se dio cita en el Tribunal Supremo de Elecciones para presionar por la firma de un acuerdo que enterrara al Combo ICE y en su lugar lo fortaleciera.

El tercer y último frente que retomamos está relacionado con la capacidad desarrollada para establecer negociaciones y acuerdos con diferentes grupos e instancias que estaban vinculados en la lucha social.

Si bien la revuelta social no tuvo una cabeza que la liderara, si era necesario establecer esfuerzos de coordinación entre las instancias más afines. Así, pueden destacarse los esfuerzos de negociación que se dieron entre la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y los grupos estudiantiles para diseñar medidas de protección ante la agresión policial o para coordinar acciones de bloqueo o de información²⁰. Pueden igualmente mencionarse las actividades desarrolladas de forma conjunta entre la CDICETS y el Grupo germinal que más adelante retomaremos.

Tercer momento. Luego del triunfo: hacia la desmovilización

¹⁹ La negociación política entre los actores civiles y los representantes del gobierno se realizaron en la sede de Tribunal de Elecciones en San José.

²⁰ Una de las negociaciones más sobresalientes estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Precisamente durante los días más efervescente de la lucha contra el Combo ICE debía realizarse la Semana Universitaria, actividad de claras connotaciones económicas. La realización de la Semana Universitaria se enfrentaba al dilema de que cuatro estudiantes universitarios se encontraban en huelga de hambre. La prensa, ansiosa de noticias para deslegitimar al movimiento social aprovecharía sin lugar a dudas la realización de la Semana Universitaria. Las estudiantes de Trabajo Social emprendieron una exitosa negociación con otras asociaciones estudiantiles que dieron al traste con la realización de la Semana Universitaria y permitieron concentrar los objetivos de lucha.

La victoria popular se celebró a lo largo y ancho del territorio nacional. Un sentimiento de satisfacción y duda quedó flotando en diferentes organizaciones sociales, era evidente que para la mayoría de la población la victoria suponía desmovilizarse; sin embargo, existía claridad que los sectores interesados en la privatización no darían marcha atrás tan fácilmente, esperarían cualquier oportunidad para reconfigurar sus fuerzas y generar nuevos espacios para insistir en la privatización del ICE.

Este panorama fue visualizado por la CDICETS y se trazaron un conjunto de acciones orientadas a llevarle el pulso a la situación política derivada de los “Acuerdos del Tribunal de Elecciones”, en las semanas posteriores al triunfo contra el Combo ICE, se organizaron dos encuentros con los integrantes de la Representación Social de la Comisión Mixta²¹ para que estos comunicaran a la sociedad civil los avances que se estaban dando en la Comisión Mixta del ICE.

Posteriormente, la misma CDICETS en estrecho vínculo con el Grupo Germinal²² organizó un encuentro con organizaciones y personas que trabajaron en la defensa del ICE. El objetivo fundamental fue propiciar la integración de diferentes organizaciones y personas en una red nacional que estuviera anuente a cristalizar esfuerzos en torno a la protección de la institucionalidad costarricense.

Luego de este encuentro, la CDICETS no desarrollo más actividades, aunque a la fecha no se ha disuelto formalmente, es notorio que el principio de desmovilización también terminó absorbiéndola. Ya en las primeras semanas posteriores a la movilización final, era evidente que sus funciones se estaban limitando y que muchas de sus integrantes originales habían dejado de participar, especialmente las estudiantes. Las responsabilidades académicas, tanto de las estudiantes como de l@s docentes no eran compatibles con un ritmo de actividades políticas que exigía de reuniones y talleres de capacitación y seguimiento en cualquier momento de la semana.

Su esfuerzo, posteriormente capitalizado y orientado brillantemente por el Grupo Germinal permitió crear una amplia red de organizaciones sociales que estuvieron al tanto de velar por el cumplimiento de los “Acuerdos del Tribunal de Elecciones”.

A criterio de l@s autores, la experiencia política del Grupo Germinal logró catapultar de manera positiva los esfuerzos realizados por la CDICETS, logrando posteriormente la conformación de la Comisión Nacional de Enlace (CONAES), organización que ha propiciado la integración de agendas sociales y la conformación de un tejido social que permite estimular la participación de la ciudadanía.

²¹ La Comisión Mixta se integró por un representante de las cámaras patronales, varios diputados de la Asamblea Legislativa y por una representación social que incluía estudiantes universitarios, sindicalistas, ambientalistas y miembros de grupos religiosos de la iglesia católica.

²² El Grupo Germinal es un colectivo de universitarios que en los años 80 conformaron el partido político estudiantil de la Universidad de Costa Rica denominado “Gente U”, muchos de sus miembros fundadores conformaron el Grupo Germinal como una alternativa para seguir desarrollando análisis de la realidad social y poder asesorar a las organizaciones sociales en su fortalecimiento político.

4. LAS LECCIONES

Las manifestaciones sociales en contra de la aprobación del Combo del ICE pueden ser entendidas como un despertar del pueblo costarricense, él que en los últimos 20 años había mostrado lamentables niveles de participación y apatía, rayando en la inactividad, el deterioro y el conformismo político. Un movimiento social de tal magnitud y capacidad de lucha, puede interpretarse como un elemento positivo para reactivar al movimiento popular y darle una nueva reconfiguración a un concepto que frecuentemente ha sido desnaturalizado: el de ciudadanía activa y plena.

Tanto el pueblo como la clase política dominante llegaron a tomar conciencia que se gestaba una nueva modalidad de construir la ciudadanía. El desafío para unos es promocionarla y arraigarla, para otros, más bien desterrarla.

La movilización social se logró desarrollar gracias a un contexto favorable en la sociedad costarricense: la ausencia de ejército. Esta condición permitió a la postre el desarrollo de las diferentes expresiones de lucha popular con una baja carga de violencia y represión gubernamental. En tal sentido, el poder expresarse y manifestarse sin el temor a ser desaparecido, torturado o asesinado genera una fuerte carga de confianza en que existen mecanismos democráticos y participativos para poder generar cambios sociales. Paradójicamente, luego del Combo ICE el gobierno reforzó las fuerzas policiales de choque para poder contener futuras movilizaciones sociales. Las reformas neoliberales en América Latina han contado con la tutela de los ejércitos y la presión del capital.

El andamiaje social y organizacional fue vital para poder enfrentar los esfuerzos privatizadores, la confluencia paulatina y hasta calculada de diferentes organizaciones sociales, especialmente los sindicatos, logró quebrar la voluntad del gobierno. No obstante, estas últimas organizaciones mostraban un desgaste histórico²³ que las hace reaccionar de manera tardía y separada, procurando consolidar feudos y procurando negociar cuotas de poder entre organizaciones de una misma naturaleza.

Esta clase de estrategia resulta a todas luces inconveniente, máxime cuando el adversario tiene tentáculos globales. La respuesta social a esta crisis organizacional se perfiló por la participación de otra clase de organizaciones que han generado mayor arraigo y representatividad en los últimos años en la sociedad costarricense: grupos ambientales, de mujeres, estudiantiles, comunales, religiosos, indígenas entre otros.

El desafío en este plano es integrar en una amplia red social a los diferentes grupos y organizaciones interesados en velar por la protección de la institucionalidad costarricense.

A casi dos años de la revuelta social contra el Combo ICE, queda una sensación de satisfacción por el proceso privatizador que se logró abortar. Los recientes cacerolazos argentinos son la mejor muestra que tanta competencia, desregulación y privatización no hacen más que generar exclusión social y atizar la hoguera de la revuelta social. La participación a tiempo y el empoderamiento de

²³ Innegable que durante los últimos lustros se dieron ingentes esfuerzos por acabar con el movimiento sindical o profundizar sus divisiones. En río revuelto, ganancia de pescadores.

la sociedad son dos recursos que a futuro permitirán detener con anticipación las experiencias aventureras de los organismos multilaterales de desarrollo en nuestra empobrecida y castigada región.

Al menos en el caso costarricense, la decepción social contra los gobernantes, legisladores y partidos políticos tradicionales -bipartidistas por cierto- se tradujo en primera instancia en un reforzamiento de la abstención a votar en las elecciones nacionales de los años 1998 y 2002. Esta situación ya había sido prevista por Cortes (2000) cuando al analizar el impacto político de las movilizaciones sociales contra el Combo ICE, había planteado la posibilidad de que aumentara el abstencionismo y que los partidos pequeños y emergentes se verían favorecidos por un electorado que no se siente representado por el bipartidismo.

Un escenario de esta naturaleza se presta a oportunismos, pero también a generar nuevos espacios de participación desde estructuras políticas que insisten en generar nuevos esquemas de participación popular. Es necesario afianzar los acuerdos, las negociaciones y ante todo, dejar de lado una sensación de mesianismo que tiende a negar o reprimir la crítica hacia "nuestro" candidato cuando está al frente del Poder Ejecutivo. El poder ciudadano debe ser fortalecido no solo desde lo institucional, sino desde una práctica cotidiana que no permita su cooptación.

En el plano profesional del Trabajo Social debemos reconocer que la primera carencia es la inexistencia de un movimiento orgánico²⁴ que nos integre en lo académico y gremial. Las respuestas sociales que a lo largo de los años hemos brindado como colectivo son básicamente de naturaleza circunstancial y no responden a una preocupación integral y políticamente organizada.

En el caso del Combo del ICE, la iniciativa estudiantil, docente y administrativa por generar una acción combativa, crítica, participativa y propositiva ante los intentos de privatización, coincidieron dichosamente con la convicción de una directora académica que estimuló y se sumó al proceso de defensa de la institucionalidad costarricense. Si el contexto académico hubiese sido contrario a esta clase de movilización, posiblemente la participación habría sido aún más limitada.

Finalmente, debemos reconocer que nuestra experiencia política es sumamente débil, aunque generalmente pregonemos nuestra intención por "transformar" la sociedad. Para muchos la experiencia política, participativa y de movilización del Trabajo Social es un recuerdo idealista de muchas de las colegas que nos antecedieron, corresponde a un contexto político marcado por la confrontación ideológica de los años 60 y 70 que no nos tocó experimentar.

De una u otra forma, se ha reforzado una tendencia que entiende al Trabajo Social como una profesión neutra, la cual no debe asociarse y comprometerse con los movimientos y causas sociales. La tecnificación burocrática del Trabajo Social deja de lado los contextos, inmoviliza e invisibiliza las condicionantes políticas e ideológicas que determinan y mueven a la sociedad.

²⁴ Para una mayor discusión sobre la organicidad de los movimientos sociales y el Trabajo Social, se recomienda el texto de Batista "La relación Servicio Social-Movimiento Social. Indicadores para un estudio".

Si seguimos la argumentación crítica de Jansen (1997), en el sentido de que el mercado y el capitalismo actuales construyen ciudadanía a partir de la capacidad de consumo de la persona, podremos dilucidar que la participación social contra el Combo del ICE, implica una ruptura con ese concepto conservador e inhibidor de ciudadanía que se nos ha pretendido imponer.

Desde esta experiencia, mantenemos esperanza en el Trabajo Social que estamos construyendo.

Bibliografía

Batista, Josefa. La relación Servicio Social-Movimiento Social. Indicadores para un estudio. En: Servicio Social y Movimiento Social. # 1. Universidad Federal de Maranhao. Brasil. 1999.

Calvo, Melania y otras. Las organizaciones no gubernamentales y su participación en la gestión de la política social costarricense. Seminario de Graduación, Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social. Costa Rica. 1993.

Carazo, Eva. ¿Después del combo qué? En: Revista Costarricense de Trabajo Social. # 12. Colegio de Trabajadores Sociales. Costa Rica. 2001.

Cortés, Alberto. El combo eléctrico y las elecciones del 2002. En: Revista Costarricense de Trabajo Social. # 11. Colegio de Trabajadores Sociales. Costa Rica. 2000.

Fallas, Marco. El liberalismo, el cultivo del café y la masonería en Costa Rica. En: Las instituciones costarricenses del siglo XX. Editorial Costa Rica. Costa Rica. 1986.

Jensen, Henning. La ciudadanía en una sociedad global. En: Revista Reflexiones, # 60. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1997.

Mann, Kirk. Privatización del bienestar. Individualismo y Estado. En: Cuadernos de Ciencias Sociales. # 48. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Costa Rica, 1992.

Molina, Iván; Palmer, Steven. Historia de Costa Rica. Breve, actualizada y con ilustraciones. Editorial de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 1997.

Solís, Otton. Pae = Crisis. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 1992.